

RECENSIONES

DERECHO PROCESAL CANÓNICO

Carmelo de DIEGO-LORA, *Estudios de Derecho Procesal Canónico*. Volúmenes III (*La función de justicia en la Iglesia*) y IV (*Función pastoral y Justicia*). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. Colección Canónica de la Universidad de Navarra. Pamplona 1990. 588 + 246 páginas.

Estos nuevos volúmenes de los *Estudios de Derecho Procesal Canónico*, del Prof. Carmelo de Diego-Lora, vienen a sumarse a los dos ya existentes, publicados en el año 1973, y que llevaban por subtítulos *Temas sobre el ejercicio de la «potestas iudicialis»* -el primero de ellos- y *Temas sobre causas matrimoniales* -el segundo-, mencionados en *Ius Canonicum* [XVI (1974) 385 ss.] por Tomás Muñoz Rojas.

La edición de los volúmenes que aquí se reseñan ha sido promovida por las Facultades de Derecho Canónico y de Derecho de la Universidad de Navarra, en homenaje al Prof. Carmelo de Diego-Lora al cesar en el Decanato de la Facultad de Derecho Canónico.

El volumen III está prologado por Mons. Amadeo de Fuenmayor, con el cual mantuvo el Prof. Carmelo de Diego-Lora una estrecha colaboración a lo largo de bastantes años, y al que sustituyó en la dirección de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra como Decano.

En el Prólogo se nos da noticia de algunos rasgos biográficos. En efecto, don Carmelo de Diego-Lora nace en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). En la Universidad Hispalense alcanza, la Licenciatura en Derecho. Un año más tarde, realiza oposiciones a judicatura, y obtiene plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción. En años sucesivos sabrá compaginar un fiel desempeño a la administración de justicia con la tarea de investigación, hasta llegar a doctorarse, por la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid.

Con el paso del tiempo irá ocupando diversos cargos en la carrera judicial, hasta ascender a Magistrado de la Audiencia Provincial de Pamplona. Por entonces, toma contacto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, y pasa a integrarse en su Claustro de Profesores como docente de Derecho Procesal. Son años fecundos,

de dedicación intensa a la formación de las sucesivas promociones de universitarios, que no le impedirá, sin embargo, acometer la preparación para el Doctorado en la Facultad de Derecho Canónico, obteniendo la máxima calificación con su tesis doctoral.

«Esos años -se lee en el Prólogo de Mons. Amadeo de Fuenmayor- son, sin embargo, aún más importantes en la vida del ilustre Magistrado. Desde hace ya tiempo pertenece al Opus Dei y, por tanto, procura servir a Dios y a la Iglesia -tal como ha aprendido de Mons. Escrivá de Balaguer- de la mejor manera posible, para extender por el mundo esa toma de conciencia de que la santidad puede alcanzarse a través de las tareas ordinarias, normales, convirtiéndose éstas, en consecuencia, en un lugar de encuentro con Dios. Recibirá la ordenación sacerdotal el 19 de marzo de 1964; desde entonces, sabrá desempeñar en perfecta unidad la labor sacerdotal con la dedicación a la Universidad».

En efecto, en rápida síntesis, D. Carmelo de Diego-Lora será profesor en el IESE de Barcelona; de 1965 a 1970, Capellán Mayor de la Universidad de Navarra; y Ordinario de Derecho Procesal Canónico en la Facultad de Derecho Canónico, y de Deontología Jurídica en la Facultad de Derecho; de 1970 a 1987 es Vicedecano de la Facultad de Derecho Canónico y, desde 1987 a 1991, Decano.

Esta actividad universitaria, no le impedirá prestar cualificados servicios a la Iglesia, en las tareas para las que se requiera su buen quehacer: así, durante bastantes años, será miembro del Consejo Presbiteral de la Archidiócesis de Pamplona; en 1981 se le nombrará, por la Conferencia Episcopal Española, Asesor de la Junta de Asesores Jurídicos.

La producción científica de este notable cultivador del Derecho comienza, en un primer momento y dentro de la parcela del Derecho Procesal Civil, con frecuentes publicaciones en la *Revista de Derecho Procesal*, siendo de destacar, entre otros, sus artículos sobre la *Interposición del recurso de queja ante el Tribunal Supremo*; *Sobre la pretendida naturaleza incidental del beneficio de pobreza*; y, sobre todo, una serie de artículos sobre el tema de los interdictos. A estas publicaciones se suman dos obras de especial interés para la procesalística civil: *La consignación judicial*, publicada por la Editorial Bosch en 1952, y *La posesión y los procesos posesorios*, en dos volúmenes, editada en 1962 por Rialp.

Otros dos aspectos, a los que el Prof. Carmelo de Diego-Lora presta su atención, son el Derecho procesal canónico y el Derecho Eclesiástico del Estado. Al primero me referiré más adelante. Respecto al Derecho Eclesiástico del Estado, señala el Prólogo que «los trabajos del Prof. de Diego-Lora se han visto notablemente incrementados por su dedicación a la Junta de Asesores Jurídicos de la Conferencia Episcopal Española.— De hecho, su tarea habitual de investigación en el Derecho procesal canónico ha cedido en favor de los estudios sobre el Derecho Eclesiástico del Estado». En efecto, no es pequeña la producción científica del Autor en esta faceta, y muestra de ello son los estudios sobre: el Concordato de 1953; la eficacia civil de las sentencias canónicas en materia matrimonial; la naturaleza jurídica de las personas morales eclesásticas en el Derecho español; los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, etc.

El trabajo científico del Prof. Carmelo de Diego-Lora en la faceta del Derecho

procesal canónico es especialmente cualificado y abundante, haciendo de él una de las figuras señeras de esta rama del Derecho Canónico.

La obra procesal del Prof. Carmelo de Diego-Lora tiene como punto focal su monografía *Poder jurisdiccional y función de justicia en la Iglesia* (EUNSA, Pamplona 1976), recensionada por el fallecido Prof. Labandeira en *Ius Canonicum* XVI (1976) 370 ss. Junto a ella, están los cuatro volúmenes de *Estudios de Derecho Procesal Canónico* que recogen los trabajos que, a lo largo de los años, ha ido publicando en diferentes revistas especializadas, y, sobre todo, en *Ius Canonicum*, de la que forma parte como Miembro del Consejo de Redacción.

Los volúmenes, que aquí se recensionan, son una buena muestra del quehacer del Prof. de Diego-Lora. En ellos se destaca la originalidad de su pensamiento en las cuestiones basilares del proceso. Se descubre, además, su cuidadosa preparación técnica y jurídica, la profundidad con que son abordados los diferentes temas, y la gran experiencia práctica que le han comunicado los años de ejercicio profesional. Si se pudiera destacar alguna faceta dentro de esta descripción general, señalaría el empeño con que el Prof. de Diego-Lora intenta deslindar, cuando se presentan, las facetas estrictamente procesales de aquellas otras que, a pesar de contar con un método procedimental, pertenecen a otro ámbito del Derecho Canónico. Y ello por que, en su visión, la función judicial se sirve de unos determinados medios técnicos-jurídicos, de características bien definidas, que, además de ser garantes de la justicia de la sentencia, la contradistinguen de las otras funciones que conforman la *potestas regiminis* en la Iglesia.

El volumen III de los *Estudios*, subtítulo *La función de justicia en la Iglesia*, además del citado Prólogo, contiene siete artículos publicados antes de la entrada en vigor del Código de Derecho Canónico de 1983.

El primero que se recoge, trata de un tema profunda y extensamente estudiado por el Prof. de Diego-Lora, me refiero al proceso documental -en la terminología del actual Código-. El artículo lleva por título *Naturaleza y supuesto documental del proceso «in casibus specialibus»*, pp. 15-213. Fue publicado en *Ius Canonicum* 14 (1974) 221-349, y constituye el primer y fundamental trabajo para adentrarse en la concepción del Autor sobre el tema. En él se estudia y se argumenta en favor de la naturaleza estrictamente procesal -no administrativa, por lo tanto- de dicho proceso. Hay una atención esmerada a sus características especiales y sumariales, atendiendo a la realidad jurídica en que opera; y, en fin, se hace hincapié en la prueba documental como justificativa de la existencia de este peculiar proceso, entonces llamado *in casibus specialibus*.

Más adelante -pp. 452-546-, el volumen recoge, en quinto lugar, también otro artículo sobre el mismo tema, titulado *Consideraciones sobre el proceso «in casibus specialibus»*, publicado por vez primera en *Ius Canonicum* 21 (1981) 309-383. El trabajo fue motivado, como señala el Autor, por una monografía de P.A. Bonnet, *Il Giudizio di nullità matrimoniale nel casi speciali*. Roma 1979. En ella el Prof. Bonnet, partiendo de una coincidente posición con las tesis del Prof. de Diego-Lora, llega a sostener, sin embargo, posturas jurídicas diferentes, bien distintas, en cuanto a la naturaleza del proceso *in casibus specialibus*. «Esto -señalará el Prof. de Diego-

Lora- me ha movido a replantearme el tratamiento del proceso *in casibus specialibus*, a estudiar los problemas que plantea. Y el deseo de hacer una nota bibliográfica a la obra ha pasado a un estudio extenso de este proceso» (p. 450). El artículo está escrito al filo de la exposición de Bonnet y siguiendo la estructura de su obra, aunque en él no se renuncia a una cierta elaboración personal sobre el tema, lo cual resalta ciertas peculiaridades de sistemática a diferencia de la propuesta por Bonnet.

Volviendo al orden que indica el índice del volumen, el segundo trabajo que nos presenta lleva por título *Procedimientos para el examen y juicio de las doctrinas*, pp. 213-312, anteriormente publicado en *Ius Canonicum* 14 (1974) 149-203. El trabajo es propiciado por la promulgación del entonces nuevo régimen jurídico para el examen de las doctrinas, por la Congregación para la doctrina de la Fe, en fecha de 15 de enero de 1971. En su primera parte (pp. 221-236), el artículo se refiere a la acogida que se dio, por parte de la doctrina jurídica, a la reforma del Santo Oficio, en relación a la competencia de dicha Congregación, sobre el examen y juicio de las doctrinas, en comparación con la que ostentan los obispos diocesanos. La segunda, más extensa (pp. 236-312), trata pormenorizadamente las normas que regulan los distintos procedimientos de la *agendi ratio in doctrinarum examine*, en las que el autor distingue: un juicio, que califica de discriminatorio, paso previo para entrar bien en el procedimiento extraordinario -de naturaleza ejecutiva y cuya iniciativa corresponde al Congreso de la Congregación- o, en su caso, en el procedimiento ordinario, de carácter procedimental más complejo en el que tienen competencias no sólo el Congreso, sino también el Consejo de Consultores y la Congregación Ordinaria del Dicasterio. En fin, «una serie de actividades diversas, de orden jurídico, tendentes a obtener una postrera conclusión, en cambio, de naturaleza teológica» (p. 254).

En conexión con ese extenso estudio sobre la *agendi ratio in doctrinarum examine* está el octavo y último de los trabajos (pp. 566-588). Y parece conveniente traerlo aquí, precisamente por esa razón, es decir, por abordar un aspecto concreto de la misma materia, que servirá al Prof. de Diego-Lora para confeccionar una comunicación para las Actas del IVº Congreso Internacional de Derecho Canónico, celebrado en Friburgo (6-11.X.1980), sobre los derechos fundamentales de los fieles. La comunicación lleva por título *Derechos fundamentales y garantías jurídicas en materia doctrinal*, y está inserta en las Actas: *Les droits fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société*, a cura de E. Corecco, N. Herzog, A. Scola, Fribourg-Freiburg-Milano 1981, pp. 309-321. Por los datos facilitados, se comprende perfectamente que la comunicación incide en aquellos aspectos del juicio previo discriminatorio, del procedimiento extraordinario y del ordinario que conectan con los derechos fundamentales de los fieles. «En resumen -escribe el Autor-, en las garantías jurídicas se consuma el ejercicio de los derechos fundamentales, en este procedimiento para el examen de las doctrinas. Donde termina el tejido procedimental con el que se clausura la esfera de la juridicidad, se agotan las posibilidades de defensa e impugnación.— Por el contrario, entrar en el tema de fondo excede de ese mundo del Derecho, pertenece al enjuiciamiento de las doctrinas examinadas, al servicio que el Magisterio eclesiástico ofrece a la Iglesia con su *munus docendi*» (pp. 587-588).

El tercer artículo que aparece en el volumen III de los *Escritos* se denomina *La función de justicia en la Iglesia* (pp. 313-364), publicado en *Ius Canonicum* 16 (1976) 287-316. De él se nos indica que fue elaborado «para su publicación en la obra homenaje al maestro de procesalistas, Prof. Dr. Leonardo Prieto-Castro y Ferrándiz. Los temas tratados en este trabajo tienen, muchos de ellos, una indudable manifestación, y debido tratamiento jurídico, en el Derecho que se califica, por los canonistas, de secular. Aquí nos hemos reducido al ámbito canónico. Si en alguna ocasión aparece el nombre de un autor ajeno a la ciencia canónica, no se le acompaña referencia bibliográfica por entender que, notoriamente, pertenece su doctrina a la común cultura jurídica» (p. 314). Este estudio del Prof. de Diego-Lora está orientado a poner de relieve el *quid* específico que determina el ejercicio del poder judicial en la Iglesia, en su radical distinción de la función administrativa o ejecutiva. En rigor, no se interroga sobre la distinción entre ambas funciones, sino sobre el por qué existe un poder judicial frente al administrativo, si una es la potestad en la Iglesia. La razón la encuentra en la misma realidad de los hechos, que nos presenta como diferenciadas *res administrativas* y *res iudiciales*. Y lo que caracteriza a éstas últimas es la situación de enfrentamiento en la que se encuentran los sujetos que sostienen intereses distintos o al menos en contradicción. «De esa previa situación de enfrentamiento, porque en ella late una exigencia de justicia, surge la acción, que permite plantear, mediante el proceso, el enfrentamiento formal que posibilita la función de justicia en la Iglesia» (p. 357).

El siguiente artículo -es decir, el cuarto- incluido en el volumen, data del año 1977 y apareció en *Ius Canonicum* 17 (1977) 15-73. Lleva por título *La tutela jurídico formal del vínculo sagrado del matrimonio*. En él se hace un detallado estudio, partiendo del entorno formal de protección jurídica, de las diversas garantías ideadas por el legislador canónico en amparo del matrimonio. El Autor las enumera así: «a) la forma garantizante de su celebración; b) el que se le proporciona un armamento defensivo de la validez del vínculo contraído, mediante un sistema específico de presunciones, que lo hacen fuerte frente a eventuales impugnaciones; y c) que el proceso por el que se pretende esa impugnación, mediante el ejercicio de la acción de nulidad, quede sometido a un tratamiento jurídico especial (...), para lo cual se adoptan las medidas procesales adecuadas que eviten su manipulación interesada al servicio del egoísmo humano» (p. 369).

La función judicial, función pastoral de la Iglesia (pp. 549-565), es el penúltimo de los artículos que contiene este volumen de escritos procesales. Anteriormente fue publicado también en *Ius Canonicum* 21 (1981) 629-640. El trabajo está realizado alrededor del discurso pronunciado por Juan Pablo II, el 24 de enero de 1981, ante la Rota Romana. El magisterio petrino sirve de base al Prof. de Diego-Lora para confeccionar este pequeño pero cuidado estudio que sale al paso de las críticas vertidas, por erradas concepciones personalistas, sobre el sistema matrimonial canónico. Entre esas críticas destaca, por su trascendencia, la lesión que -según tales concepciones- se produce a la humana dignidad, por ignorar la libertad del hombre en la presunta rectitud de su conciencia. En consecuencia, dado que el cauce canónico no llega a satisfacer sus

personales exigencias, sobre todo cuando la sentencia es *pro vinculo*, se legitima el recurso a soluciones «pastoralistas», entre las que cuentan el divorcio civil, prescindiendo de que resplandezca la verdad objetiva enterañada en esa concreta situación.

Paso a continuación a dar noticia de los aspectos más sobresalientes del otro volumen objeto de esta recensión. Es el IVº de los que componen los *Escritos de Derecho Procesal Canónico*, y se intitula *Función pastoral y justicia*. El volumen lo integran nueve trabajos, posteriores todos ellos a la promulgación del Código de Derecho Canónico de 1983. Tratan de temas procesales, en el sentido de abarcar la actividad no sólo técnico-jurídica sino también ética de los tribunales y jueces.

El primero de los artículos que encuentra el lector hace referencia a un tema que ya ha sido objeto de otros dos estudios anteriores, y de los cuales hemos dado cuenta al hablar del contenido del tercer volumen de los *Estudios*. El trabajo se titula *El proceso documental del nuevo Codex Iuris Canonici* (pp. 9-28), y corresponde a una conferencia pronunciada por el Autor en el VIII Curso de Actualización en Derecho Canónico, el 28-IX-1983, organizado por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Fue publicado más tarde por *Ius Canonicum* 23 (1983) 663-677. El estudio puede considerarse una actualización o adaptación al Código vigente de los anteriores trabajos realizados por el Autor sobre el proceso *in casibus specialibus*, constituyendo los tres un auténtico tratado sobre el tema. Con el rigor técnico propio del especialista en la materia, el Prof. de Diego-Lora va delineando los aspectos más sobresalientes de la nueva regulación, comenzando por los presupuestos procesales, para pasar después a las características del contradictorio que definen a este proceso y que se fundamentan en el supuesto documental, y terminar, en fin, señalando las peculiaridades de las sentencias y posteriores recursos que el legislador ha delineado para el proceso documental.

El segundo de los estudios lleva por nombre *Jueces, abogados, procuradores, ante la ley civil de divorcio* (pp. 29-65). Publicado por vez primera en *Ius Canonicum* 23 (1983) 753-778. El artículo atañe a la dimensión moral que comporta la actividad de los operadores de la justicia en el desempeño de sus funciones, sobre todo en el campo de la justicia civil o secular. La cuestión es de gran actualidad, y el trabajo del Prof. de Diego-Lora supone una guía certera para los fieles cristianos que se encuentran en los supuestos de hecho en él delineados. Las condiciones del Autor son, además, idóneas para afrontar adecuadamente un estudio de este tipo, pues en él concurren una dilatada experiencia como Magistrado en los tribunales civiles, y una cuidada preparación teológica fiel al magisterio sobre la moral cristiana. El trabajo tiene dos partes bien definidas: la primera (pp. 31-45) aborda la cuestión de la sentencia de divorcio civil a la luz de la moral católica, y en ella se analiza la ilegitimidad de la ley civil de divorcio y cuál sea la actitud que, en su aplicación, deban tomar los jueces. La segunda parte atiende más al comportamiento de los abogados y procuradores en relación a la asistencia técnica que pueden prestar a los clientes que la soliciten para obtener el divorcio o separación ante los tribunales civiles. Para la resolución de ambos casos, el Prof. de Diego-Lora hace un análisis detallado de la valoración moral de las acciones de doble efecto y la posible cooperación al mal. El trabajo, como queda dicho, es

especialmente útil para los católicos y personas de buena voluntad que trabajan alrededor de los tribunales de familia.

Estrechamente relacionado con el trabajo anterior hallamos el número siete de este volumen de los *Escritos*, bajo el título *Jueces y abogados ante la ley injusta* (pp. 153-181), realizado para la revista *Persona y Derecho* 16 (1987) 155-178. La diferencia con el anterior se localiza en el enfoque, pues mientras aquel hacía referencia a una cuestión puntual -la ley de divorcio civil-, en este artículo se aborda el tema más general de cuál deba ser la conducta de los católicos ante cualquier ley injusta promulgada en el ordenamiento secular. En especial, se estudia la posible cooperación de aquellas personas que, por su situación profesional -jueces, abogados y procuradores-, están más implicados en esta materia.

El tercero de los trabajos aquí recogidos (pp. 67-79) se publicó en *Ius Canonicum* 24 (1984) 795-803, bajo la denominación de *Comprobación de la libertad para contraer matrimonio de los obligados a la forma canónica y no la observaron*. El artículo es un comentario a la segunda de las Respuestas -una vez promulgado el vigente Código de Derecho Canónico- de la entonces Pontificia Comisión para la Interpretación Auténtica del Código. La Respuesta es de octubre de 1984. El *dubium* planteado era doble, por cuanto se exponían dos formas distintas de resolver una única cuestión. En concreto, se preguntaba sobre la legitimidad del uso del proceso documental para comprobar el estado de libertad de quienes, aunque obligados a la forma canónica, no la observaron. En su segunda parte, y ante la respuesta negativa a la primera cuestión, se interrogaba sobre si era suficiente, para resolver esos casos, la investigación prematrimonial según viene regulada por el Código. A lo que se respondió afirmativamente. El comentario del Prof. de Diego-Lora sigue la estructura de los *dubia*, y procede a analizar los datos de derecho y hecho que sostienen las respuestas de la Comisión. Basten, a modo de ejemplo, las siguientes palabras: «Cuando falta por completo la forma canónica del matrimonio para los a ella obligados, por que éstos acudieron a formas no canónicas (...) no hay necesidad de demostrar nulidad contractual alguna. Un acto jurídico se presume válido, según el c. 124 § 2, cuando se realiza debidamente en cuanto a elementos externos. Estos son los que soportan al acto jurídico en su presunción de validez. Sólo cuando existan actos externos y se niegue porque, a pesar de ellos, hay vicio de nulidad, habrá que destruir la presunción de validez con una sentencia declarativa de la nulidad» (p. 74).

Independencia y dependencia judicial en el nuevo Código (pp. 81-105) hace el número cuatro de los estudios contenidos en el IV volumen. Fue confeccionado para la obra *Raccolta di Scritti in Onore de Pio Fedele*, y aparece publicado en el tomo I de la misma, a cura de G. Barberini, Perugia 1984, pp. 417-435. Nos encontramos ante un tema de gran raigambre en el derecho procesal, y cuya trascendencia se calibra por la salvaguardia con que rodea la actividad del juez canónico y elimina, de su actuación, cualesquiera sospechas de parcialidad frente a las partes. El fundamento teórico de la independencia judicial se trae de la mano de reconocidos procesalistas (Chiovenda, Calamandrei, etc.), con los que el Autor entra en un corto pero aclarador diálogo. El Prof. de Diego-Lora retoma aquí uno de los elementos básicos de su doctrina procesal,

heredera de Jaime Guasp, y que se muestra especialmente fecundo a la hora de estudiar el proceso canónico. Me refiero a la concepción institucional del proceso, propugnada antaño por el Prof. Guasp, a la que el Autor despoja del lastre formalista, y la dota de un fin objetivo y permanente, «que preside teleológicamente todo el proceso en su inspiración y desenvolvimiento. Esta idea -señala el Autor- es la realización de la justicia del caso concreto, mediante la aplicación de la ley canónica a una verdad objetiva, que ha de llegar a ser conocida materialmente por el Juez o Tribunal, no bastando que se pueda satisfacer el fin del proceso por el solo hallazgo por el Juez de una verdad meramente formal» (p. 92). Ese fin institucional, será el garante del equilibrio necesario de la independencia del juez, que se traduce procesalmente en el juego de los principios dispositivo y de oficialidad o inquisitivo, como le llamaban los canonistas clásicos.

Seguidamente encontramos dos estudios sobre las causas de separación matrimonial, que aparecen ocupando el quinto y sexto lugar del volumen. El primero lleva por título *Las causas de separación de cónyuges según el nuevo Código* (pp. 107-128), publicado, en 1984, por la Editrice Vaticana, en la obra *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani* (cur. Z. Grochowski y V. Cárcel Ortí), pp. 389-403. El segundo (pp. 129-152), publicado en *Ius Canonicum* 25 (1985) 209-225 bajo el nombre de *Medidas pastorales previas en las causas de separación conyugal*. Ambos trabajos son complementarios. En efecto, el dedicado a los estudios en honor del Card. Sabattani, se circunscribe a un estudio procesal de las causas de separación tal como han sido reguladas por vigente Código: tipos de causas, naturaleza de ellas y peculiares normas de actividad, decisión y recursos. De intento, sin embargo, se deja para otra ocasión el análisis de los preceptos que atienden a la eficacia civil de las decisiones jurisprudenciales canónicas sobre separación y los requisitos que para ello exige el legislador; temas que son objeto del segundo de los artículos más arriba señalados. En estos trabajos el Prof. de Diego-Lora llama la atención sobre un desgraciadamente generalizado fallo de praxis jurídico-pastoral que soslaya las medidas pastorales previstas por el legislador y tendentes a la reconciliación de los cónyuges. Si bien es cierto que la Iglesia puede transferir -atendiendo a una serie de requisitos- al fuero civil la jurisdicción en las causas de separación, no parece que ello sea trasplantable a las medidas pastorales prescritas en el c. 1695. Esos medios serán efectivamente aplicables si la licencia del Ordinario, necesaria para acudir a la jurisdicción civil, se otorga caso por caso.

Pasamos al octavo de los estudios, que se encuentra bajo la denominación de *Control de la justicia de la sentencia firme y definitiva en el proceso canónico* (pp. 183-224). Aparecido en los *Estudios en homenaje al Profesor D. Lamberto de Echeverría*, pp. 381-404, editados por la Universidad de Salamanca en 1988. Dado que el término «control» -usado por el Autor en el título del trabajo- puede llevar a confusión al ponerse en relación con la sentencia del proceso canónico, y ser entendido como una especie de fiscalización de las decisiones jurisprudenciales por parte de los órganos de la administración, el Prof. de Diego-Lora procede a aclarar que, si bien el uso del término es más propio de la función administrativa, la significación del

mismo, en sus connotaciones de juicio de verificación y de juicio de superioridad, son plenamente aplicables al ámbito propio del ejercicio de la *potestas iudicialis* mediante el sistema de recursos ordinarios o extraordinarios. Y a éstos, en su función de control de las sentencias, es a los que se referirá el artículo. La función de control aparece diferenciada según el tipo de recurso: a la apelación, por ejemplo, se le señala una función de control de la ley en relación a la armonía entre hecho y derecho; la querrela de nulidad, si se interpuso cuando la sentencia era ya firme e irrevocable, cumple el papel de control canónico de legalidad formal, pero si prosperase, el juez o tribunal deberá entrar de nuevo en el juicio de la cuestión de fondo; y, en fin, la *restitutio in integrum* sí actúa, en todos sus casos, como control de la justicia de fondo de la sentencia canónica.

El noveno y último de los trabajos que nos queda por reseñar es el dedicado a la *Vigilancia y control de la legalidad de los tribunales eclesiásticos por el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica* (pp. 225-246). Conferencia pronunciada en el XIV Curso de Actualización en Derecho Canónico (18 a 23-IX-989) y publicada en *Ius Canonicum* 30 (1990) 113-149. El Prof. de Diego-Lora aboga en estas páginas por distinguir netamente entre la función de cuidar de la recta administración de justicia, de la función de control de legalidad de las sentencias de los tribunales eclesiásticos, ambas atribuidas a la Signatura Apostólica. En efecto, la función de control de legalidad de las sentencias -según el Autor- merece que se realice por la vía de los recursos judiciales regulados por la ley. El cuidado y vigilancia de la recta administración de justicia, por el contrario, se debe realizar por vía administrativa, en la que caben inspecciones, visitas, expedientes, etc., sobre conductas irregulares de jueces, personal de las oficialías, abogados y procuradores. A lo largo del artículo, el Prof. de Diego-Lora va analizando ambas cuestiones teniendo en cuenta las tres últimas regulaciones al respecto; es decir, la *Regimini Ecclesiae Universae*, el Código de Derecho Canónico de 1893 y la Constitución Apostólica *Pastor bonus*.

Se llega así al final de este somero análisis de los volúmenes tercero y cuarto de los *Escritos de Derecho Procesal Canónico*, especialmente representativos del buen quehacer del Prof. D. Carmelo de Diego-Lora. En ellos queda de manifiesto, con claridad, lo que afirma Mons. Amadeo de Fuenmayor al final del Prólogo al tercer volumen: «Si se me pidieran los perfiles humanos de D. Carmelo como hombre de Derecho, expuestos con brevedad, yo diría lo que diría cualquiera que haya mantenido trato habitual con él. En D. Carmelo, jurista nato, con una vocación profesional bien correspondida, la ponderación y serenidad en el juicio coadyuvan al prudente enjuiciamiento, del que procede el dictamen según justicia. Y esta virtud se ve adornada de aquellas otras que contribuyen a manifestar el perfil amable de la justicia y le dan su sentido pleno; la afabilidad en el trato, el respeto por la opinión ajena, la veracidad y la prontitud para rectificar el juicio propio cuando lo reclama la justicia». Así lo piensa el Prof. de Fuenmayor, y a ese juicio acertado se adhiere el que firma esta recensión.